

LA CRISIS QUE SE AVECINA POSIBLEMENTE... ¹

*Henning, Jensen P. **

Hace casi cuatro años en el segundo semestre de 1991, las universidades públicas y el gobierno de entonces se encontraban en proceso de negociación del Fondo Especial de la Educación Superior, conocido por las siglas FEES, cuya vigencia es de cinco años. Esas negociaciones culminaron con la firma de un nuevo convenio, acto que, sin embargo, fue precedido, durante varios meses, por un clima de viva incertidumbre, en el que las instituciones públicas de educación superior vieron seriamente amenazadas sus garantías presupuestarias.

Los responsables de la política económica y financiera de la administración Calderón Fournier experimentaban franco malestar ante las transferencias que, en virtud de un claro mandato constitucional, el gobierno debe hacerle a las universidades públicas. Se argumentaba que la educación superior es onerosa en demasía, que estas instituciones debían solventar sus propias dificultades financieras mediante la venta de bienes y la prestación remunerada de servicios; que sólo debía realizarse investigación contratada por fuentes externas; que los ingresos institucionales por cobro de matrícula debían ser suficientes, para asegurar una alta proporción de los requerimientos presupuestarios de las universidades estatales: que quienes no pudiesen pagar la matrícula debían recurrir a préstamos para la educación. Estos y muchos otros argumentos fueron esgrimidos en aquel entonces.

Los razonamientos de las universidades públicas no encontraron inicialmente oídos receptivos. Fue necesario declarar una huelga de doce días. Las calles de San José se llenaron de manifestantes multitudinarios, como hace mucho tiempo no se había visto en nuestro país. En octubre de 1991, docentes, estudiantes y funcionarios administrativos, apoyados por una jubilosa ciudadanía, desfilamos con alegría contagiosa, pero con valiente firmeza, por la defensa de una de las más preciadas conquistas del pueblo costarricense: la educación superior pública. Fueron días de gloria.

Quienes protestaban por las calles y quienes observaban a esos universitarios y universitarias de espíritu generoso, en octubre del 91, evocaron en sus mentes otra lucha de semejantes proporciones: la que veintiún años atrás protagonizaran la Universidad de Costa Rica y, en verdad, gran parte del pueblo costarricense, en defensa de la soberanía nacional, en contra de los voraces intereses de la "Aluminium Company of América", la

¹* Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

ominosa ALCOA. Tan memorable fue aquella lucha que entre nosotros la guardamos como gesta patriótica. Tanto así que un hermoso espacio, en el mero corazón de nuestra ciudad universitaria, lleva el nombre de "Plaza 24 de Abril", en remembranza de aquellos hechos históricos.

A los 25 años de la gesta contra ALCOA y apenas 4 años después de la más reciente lucha presupuestaria, nos encontramos nuevamente a punto de escuchar los mismos argumentos contra la educación superior pública. Otra vez la misma miopía y mezquindad, impuestas por los organismos financieros internacionales. De nuevo las voces de la muerte contra nuestra banca nacionalizada, contra nuestro sistema de comunicaciones, contra nuestra seguridad social, contra nuestro sistema de seguros, contra nuestras universidades. De nuevo nos acechan los traficantes del miedo, quienes no pregonan otra cosa que la vacía estética del consumismo, quienes no conocen más que la fría ley del mercado. De nuevo este pueblo sin ejército y amante de la paz, ejemplo virtuoso de la humanidad, que por sólo este hecho merecería todos los financiamientos imaginables, como parangón de todas las naciones del mundo, es hostigado por los desnudos intereses del capital y por los apologetas de la desesperanza.

Bien sabido es que el Gobierno de la República ha obtenido menguados éxitos en las negociaciones relativas al tercer programa de ajuste estructural, y que ello implica una disminuida afluencia de divisas a las arcas nacionales. Esta circunstancia, aunada a un enorme déficit fiscal, podría provocar una crisis económica de grandes proporciones, equiparable a la que experimentáramos hace más de una década.

Pero todavía no se han jugado todas las cartas. Sin ser economista, haciendo uso sólo de la imaginación, supongo que esas cartas son la condonación de deudas externas, la postergación del pago de intereses de deudas existentes o vencidas, la consecución de préstamos en naciones marginales a los grandes organismos financieros internacionales, las medidas tributarias anunciadas, etc., etc. Una de esas cartas es la disminución drástica de las inversiones públicas, como es evidente, entre las que se encuentra la restricción de las transferencias presupuestarias a las universidades públicas.

En nuestro país, hay quienes profesan una suerte de culto por los programas de ajuste estructural y, en ocasiones, para convencer a los escépticos esgrimen todo tipo de datos y estadísticas macroeconómicos. Los números se benefician del aura de la cientificidad: parecen convincentes y nos apabullan con su aparente objetividad y neutralidad. Pero nosotros(as), quienes practicamos las ciencias sociales, sabemos que no existe neutralidad en el conocimiento científico; que, por el contrario, existen "intereses rectores del conocimiento" (Habermas), que actúan como instancias a priori del quehacer

científico. Son intereses que se forjan previamente en el mundo social, al cual la ciencia se encuentra indisolublemente vinculada.

Pero el conocimiento científico ha adquirido tal autoridad en nuestro mundo, el mito de su neutralidad se ha vuelto tan resistente a la crítica y la "cultura de los expertos" se ha entronizado con tanta vehemencia, que ya apenas se escucha la voz tenue de la sabiduría de las gentes del común, de aquellos(as) que como ustedes y yo sabemos. por nuestra experiencia vital, por lo que vivimos día tras día, que con tantos programas de ajuste estructural nuestras vidas no han cambiado hacia lo mejor. No en vano, al período de aplicación de dichos programas se le denomina "la década perdida", "Perdida" para nosotros, pero "ganada" por otros. En este asunto, el saber de las gentes, como lo llamaba Foucault, contiene más verdad que toda la montaña de estadísticas del Banco Central.

La crisis que se avecina posiblemente sea la más fuerte de nuestra historia universitaria, si no se evita con acciones que, en virtud de las circunstancias, parecerían rayanas con lo milagroso. A las universidades públicas se nos demandará contemporizar con las medidas de contención del gasto público; se nos señalará como responsables de una importante porción del déficit fiscal, aunque nuestra participación presupuestaria en el producto interno bruto se haya mantenido porcentualmente constante a lo largo de los años; señalarán nuestros errores y deficiencias, pero seguramente obviarán también nuestros logros. No hay duda de que debemos corregir muchas cosas, tarea en que estamos todos(as) comprometidos. Pero en todo esto debemos prestarle oídos acuciosos a aquellas vociferaciones del odio, que ojalá sean las menos, que apuntan contra el corazón mismo de la educación superior pública, contra la legitimidad de su propia existencia.

Debemos recordar que la existencia de la universidad pública forma parte de un proyecto de nación. Al fundar la Universidad de Costa Rica, hace ya más de cincuenta años, nuestros gobernantes la visualizaron como factor que ampliaría el ancho horizonte de nuestra democracia, pues ella contribuiría al bienestar general de la nación, a la vida ética de sus habitantes, al desarrollo material del país; comprometida con el pensamiento innovador, la imaginación crítica y creativa, la Universidad fomentaría el diálogo respetuoso que nos aleja de los argumentos de autoridad y nos acerca a la autoridad de los argumentos y de las ideas.

No en vano nuestras universidades públicas llevan el nombre de nuestra patria; son ellas la universidad de la nación costarricense, de su pueblo "labriego y sencillo"; son las universidades de cada ciudadano y ciudadana. En ellas se han forjado decenas de

miles de profesionales, que con su trabajo han contribuido a que en este país pobre se haya dado el prodigio de que, en medio de tantas carencias, hayamos logrado índices de salud, alfabetismo y esperanza de vida, que en mucho asombran a las naciones más poderosas del mundo.

Debemos entonces preservar lo bueno que hemos forjado y corregir las equivocaciones que hemos cometido. Pero la esencia de la universidad pública debe permanecer, por respeto a quienes vieron en ella la cristalización de sus más dignas aspiraciones; porque en ella confluyen saberes y valores que nos permiten soñar con una vida mejor en un mejor país. Y si nuestros sueños son pesadillas para los poderosos, pues ¡qué así sea!. No porque ellos se desvelen dejaremos nosotros de soñar.